

Los límites de la democracia contemporánea y de las teorías de la transición

H.C.F. MANSILLA

El ensayo esboza una crítica a las teorías de la transición democrática y seguidamente trata de mostrar las limitaciones de toda democracia de masas contemporánea. Las teorías de la transición son calificadas de institucionalistas porque descuidan el «país real», atribuyendo una importancia exagerada al «país legal». El autor propone un cuestionamiento de fenómenos que estas teorías presuponen como positivos: los enfoques contractualistas, la modernidad y la globalización, el crecimiento económico incesante, la mercantilización de toda la vida social, la expansión de los medios masivos de comunicación, la calidad ética e intelectual de las elites gobernantes y la falta de una concepción del bien común.

A comienzos del siglo XXI se puede afirmar que la democracia pluralista posee notables ventajas en comparación con regímenes autoritarios de muy diversa conformación. Esto vale no solo para la protección de los derechos inalienables de la población, sino también para el posible futuro de la comunidad en cuestión: es indispensable contar con una sociedad que sea consciente de sí misma, de su potencial evolutivo y sobre todo de sus limitaciones, aunque esa autoconciencia crítica sea detentada por una reducida fracción de sus habitantes. Sistemas sociales opuestos a la democracia pluralista, como los modelos armonicistas derivados del *corpus* del marxismo, han resultado ser poco flexibles y se adaptan difícilmente a entornos cambiantes. Como no poseen instituciones de autorreforma, estos ordenamientos sociales se hallan expuestos a formas fácticamente incorregibles de abusos, burocratización, deficiente asignación de recursos y corrupción en gran escala.

H.C.F. MANSILLA: doctorado en filosofía por la Universidad Libre de Berlín; concesión de la *venia legendi* por la misma universidad; actualmente es profesor visitante en la Universidad de Zurich; autor de varios libros sobre teorías del desarrollo, ecología política y tradiciones político-culturales latinoamericanas.

Palabras clave: transición democrática, enfoques institucionalistas, cultura política, elites.

Considerando la dimensión del largo plazo los mejores gobiernos han resultado ser aquellos que pertenecen a la tradición liberal-democrática en el sentido amplio del término (a la cual la socialdemocracia ha hecho contribuciones fundamentales) y que admiten en su seno tendencias contrapuestas, porque este modelo pluralista se basa en una visión más sobria y realista de los seres humanos, los grupos y partidos, tomando en cuenta sus vicios, ambiciones y desaveniencias perennes. Pero los aspectos positivos de la democracia y la modernidad son hartamente conocidos para celebrarlos otra vez, máxime si hasta antiguos marxistas, convertidos a las modas intelectuales del día, hoy se consagran a ello con encomiable celo. En este ensayo se tratará 1) de indicar las carencias analítico-críticas de la así llamada *teoría de la transición a la democracia*, para 2) proseguir con un cuestionamiento somero de la democracia en cuanto factor decisivo del ordenamiento social contemporáneo.

Las insuficiencias de los enfoques institucionalistas

Una dilatada literatura ha puesto el énfasis en aspectos generalizables del pluralismo democrático¹, en las estructuras formales del tránsito del autoritarismo a la democracia², en el análisis de instituciones y partidos³, en el examen comparativo del presidencialismo y el parlamentarismo⁴, en reformas electorales⁵ y finalmente en la llamada ingeniería política⁶. La calidad y pertinencia de estas investigaciones, en las cuales se han distinguido Dahl, Lijphart, Linz, Mainwaring, O'Donnell, Przeworski, Sartori y Schmitter (como también sus muchos discípulos), están fuera de toda duda. Estos enfoques teóricos han contribuido eficazmente a comprender la problemática latinoamericana, a diseñar reformas constitucionales de considerable relevancia y a atenuar la cultura política del autoritarismo.

1. Cf., entre muchos otros: Robert A. Dahl: *Democracy and Its Critics*, Yale U.P., New Haven, 1989; Adam Przeworski: *Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*, Cambridge U.P., Cambridge, 1991; Giovanni Sartori: *Teoría de la democracia*, Alianza, Madrid, 1987.

2. Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead (comps.): *Transitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy* (2 vols.), Johns Hopkins U.P., Baltimore, 1986; Scott Mainwaring, G. O'Donnell, J. Samuel Valenzuela (comps.): *Issues in Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective*, Notre Dame U.P., Notre Dame, 1992.

3. G. Sartori: *Parties and Party System. A Framework for Analysis*, Cambridge U.P., Cambridge, 1976; S. Mainwaring y Timothy R. Scully (comps.): *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, Stanford U.P., Stanford, 1995.

4. Arend Lijphart (comp.): *Parliamentary versus Presidential Government*, Oxford U.P., Oxford, 1992; Dieter Nohlen y Mario Fernández (comps.): *El presidencialismo renovado. Instituciones y cambio político en América Latina*, Nueva Sociedad, Caracas, 1998.

5. Mitchell A. Seligson y John A. Booth (comps.): *Elections and Democracy in Central America Revisited*, North Carolina U.P., Chapel Hill, 1995; D. Nohlen: *Los sistemas electorales en América Latina y el debate sobre la reforma electoral*, UNAM, México, 1993.

6. G. Sartori: *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*, New York U.P., Nueva York, 1994.

La teoría de la transición a la democracia posee una inclinación *institucionalista*, imprescindible y legítima como especialización y delimitación temática dentro de una inmensa área del saber. Pero esta propensión puede conllevar una distorsión del análisis sociopolítico si permanece como la última palabra del quehacer teórico y si por privilegiar la esfera institucional se descuidan otros campos igualmente importantes. Muchas ilusiones desautorizadas por los acontecimientos de los últimos años se deben a la creencia de que la ingeniería política, los cambios institucionales y la instauración de una economía de libre mercado bastarían para generar democracias duraderas y bienestar colectivo. Considerables expectativas ligadas a los procesos de modernización y democratización han resultado una simple desilusión porque la inmensa mayoría de los cambios institucionales, los esfuerzos de la ingeniería política, las reformas electorales, la renovación de los poderes judicial y legislativo y hasta la reducción del aparato administrativo-burocrático han modificado el *país legal*, pero han dejado bastante incólume el *país real* de la respectiva sociedad⁷. El llamado *mínimo procedimental* (basado en una concepción de Dahl⁸) no toma en cuenta las realidades históricas, económicas y culturales de la sociedad en cuestión que, en general, tienen una resistencia al cambio mucho mayor que la esfera legal-institucional.

Pero lo grave es que estas teorías institucionalistas no han sido críticas consigo mismas, y esto en dos planos, uno filosófico y otro práctico-político. Por un lado, casi todas ellas parten *a limine* de la presunta bondad intrínseca de la democracia y la modernización en cuanto metas normativas y hasta obligatorias de la evolución histórica. Los pensadores de estas corrientes no cuestionan sus conceptos fundamentales de modernidad, democracia, mercado libre y globalización⁹. Una parte de esta literatura confunde medios y fines: la senda de la democratización, ciertamente indispensable, es identificada con la consecución de una sociedad razonable. A partir de aproximadamente 1980 se ha desatado una ola *acrítica* de defensa de la democracia moderna de corte occidental y de la economía de libre mercado, que olvida un punto esencial: por más perfecto que sea, el modelo democrático basado en el liberalismo económico es, en el fondo, solo un *medio* para alcanzar *fines* ulteriores, un camino para lograr metas realmente importantes a largo plazo. Entre ellas se hallan, por ejemplo, el bienestar de la población, su perfeccionamiento ético y la reconciliación con la naturaleza.

7. Cf. los brillantes ensayos de G. O'Donnell: «Ilusiones sobre la consolidación» en *Nueva Sociedad* N° 144, 7-8/1996, Caracas, pp. 70-89; G. O'Donnell: «Rendición de cuentas horizontal y nuevas poliarquías» en *Nueva Sociedad* N° 152, 11-12/1997, Caracas, p. 153 y ss.

8. R.A. Dahl: *Polyarchy. Participation and Opposition*, Yale U.P., New Haven, 1971, p. 1 y ss.; cf. la crítica de estas teorías: Sandra Carreras: «Quince años en el laberinto democrático. Itinerarios y aporías de un debate sobre América Latina» en *Nueva Sociedad* N° 160, 3-4/1999, Caracas, pp. 29-47 (esp. pp. 30 y 32).

9. Sobre los equívocos del concepto de globalización, cuya extremada popularidad lo hace sospechoso y poco útil, cf. el brillante ensayo de Klaus Bodemer: «La globalización. Un concepto y sus problemas» en *Nueva Sociedad* N° 156, 7-8/1998, Caracas, pp. 54-69.

Lo que se requiere, en cambio, es un análisis más profundo que cuestione la validez de las metas normativas de estas teorías: un estudio que ponga en evidencia los límites y las insuficiencias de los modelos democráticos, los aspectos negativos concomitantes de toda modernización y el carácter superfluo de tantos fenómenos vinculados a la globalización. Lo que podríamos llamar la calamidad del presente estriba en que es teóricamente posible construir una sociedad más justa y razonable con base en los logros tecnológicos y organizativos preexistentes, pero esta posibilidad se ve coartada por factores que se hallan allende el horizonte teórico-conceptual de las doctrinas de la ingeniería política y la transición democrática. La desventura contemporánea reside en el hecho de que la evolución de la humanidad a largo plazo, la convivencia razonable de los mortales y los problemas ecológico-demográficos pueden ser comprendidos cabalmente solo por medio de esfuerzos conceptuales que vayan más allá de la compilación confiable de datos empíricos y del examen de instituciones políticas y comportamientos electorales. Para acercarnos a esta compleja problemática es menester, por ejemplo, la capacidad de atribuir sentido a nuestras acciones globales y de poder elegir entre varias opciones de futuro y, por consiguiente, la facultad de emitir juicios valorativos. Se puede aseverar que la mayoría de los intelectuales y políticos del presente no dispone de estas aptitudes ni se preocupa por estos temas, puesto que sus intereses y los de la burocracia estatal-administrativa giran en torno de cuestiones profanas de corto aliento, enmarcados dentro de la racionalidad instrumental.

Por otro lado, estas teorías acerca de la democratización parten de presupuestos equivocados con respecto a la construcción de una opinión pública amplia, crítica y esencialmente responsable de su labor. Estas concepciones acarician ideas demasiado optimistas en torno del rol presuntamente positivo y progresista que juegan la prensa y sobre todo la televisión. Mientras más crece el ámbito que cubren la prensa, la radio y la televisión, más débiles resultan ser su mensaje intelectual y su facultad de educación crítica. La dilatada cobertura de los medios masivos de comunicación –precisamente su aspecto democrático-popular– hay que pagarla mediante el incremento de una publicidad irracional y una programación cercana a la estulticia. Si antes los medios estaban destinados a un público pequeño que razonaba acerca de los asuntos políticos, hoy se dirigen mayoritariamente a una masa de consumidores mediocres. Las consecuencias pueden ser funestas para la conformación de una opinión pública razonable y, por ende, *para todo modelo de democracia*: los medios sirven para transmitir desde arriba mensajes a las masas a través de un autoritarismo suave y persuasivo, y no para esclarecer a la población o para brindar legitimidad a proyectos mediante el debate basado en los buenos argumentos.

La mayoría de los autores que propugnan las reformas democratizadoras no llega a aprehender la gravedad de la situación global, especialmente de todo aquello que tiene que ver con la dilapidación de recursos naturales y el incremento de las demandas de la población. Hace falta una ética de la respon-

sabilidad frente a la naturaleza y a nuestros descendientes, y esta no puede ser la tarea de muchos agentes aislados que persiguen solo su ventaja individual, como ha resultado ser la democracia neoliberal de nuestros días. Para actuar con responsabilidad social de largo aliento necesitamos al Estado o a alguna institución semejante.

El otro grupo de temas descuidados por las teorías institucionalistas tiene que ver con la realidad histórico-cultural donde ocurren los procesos de transición. Estos enfoques pueden ser calificados de generalistas porque tienden a abstraerse de las numerosas realidades sociales e históricas. Es decir, a pesar de manejar notables masas de conocimientos empíricos y emplear generosamente la comparatística, estas teorías se inclinan por diagnósticos y soluciones de índole universalista. Los fenómenos concretos aparecen a menudo como meros casos específicos de aplicación de las doctrinas generales.

Anticipando el resultado de esta crítica se puede aseverar que después de largos años de transición a la democracia, en América Latina el proceso de democratización ha generado notables edificios institucionales que coexisten en curiosa simbiosis con normativas no escritas, costumbres ancestrales y prácticas cotidianas premodernas, particularistas y hasta irracionales. Muchas veces la democratización y la modernización han servido para revigorizar tradiciones premodernas y, de este modo, hacerlas más resistentes frente a impugnaciones realmente serias. En el caso colombiano, Gabriel Murillo Castaño mostró la brecha entre la esfera legal y la praxis política cotidiana: las leyes y las instituciones de la reforma poseen un carácter ciertamente modernizador, pero los comportamientos de la vida diaria son los mismos de antes de los cambios. La persistencia de la pobreza y la abstención a intervenir en procesos electorales de todo tipo propenden a socavar el sentido de toda representación político-institucional¹⁰.

Dos fenómenos preocupantes: el cinismo de las modernas elites políticas y la apatía de las masas

En el Nuevo Mundo la democracia representativa, unida a la economía de libre mercado, está conducida por elites y partidos políticos cuya competencia técnica, cualidades morales y hasta *common sense* han resultado ser bienes notablemente escasos. No parece que esta situación vaya a cambiar en el futuro inmediato. A pesar de la creciente abstención electoral y del descontento difuso y anómico, todavía no parece que esta constelación sea percibida como realmente grave por la mayoría de la población, que se empeña en elegir a gobernantes y grupos políticos de dudosa calidad. Uno de los problemas poco estudiados por los enfoques institucionalistas, pero de importancia esencial, se refiere a la *calidad intelectual y ética* de los grupos dirigentes encargados de implementar las reformas modernizadoras. Se puede obser-

10. Gabriel Murillo Castaño: «Representación, ciudadanía y nueva constitución en Colombia» en *Nueva Sociedad* N° 160, 3-4/1999, Caracas, pp. 47-55 (esp. p. 52 y ss.).

var que estos estratos sociales, ahora consagrados a la ideología neoliberal, son fragmentos de las antiguas elites proestatistas, antidemocráticas e iliberales. Han cambiado ciertamente su discurso ideológico, sus hábitos ante la opinión pública y sus alianzas externas, pero siguen siendo la misma capa privilegiada de antaño con su mentalidad inextirpable de servirse eficazmente de los fondos fiscales, pero ahora con una mejor educación cosmopolita y con inclinaciones tecnicistas. Las elites actuales, *legitimadas democráticamente*, han resultado ser grupos remarcablemente autosatisfechos, arrogantes y cínicos, lo cual no sería tan grave si éstos ostentaran un mínimo de competencia administrativa, honradez en el desempeño de sus funciones y algo de interés por la estética pública. Lo que han logrado en la esfera de la cultura cotidiana, y esto sin duda alguna, es la separación entre moral y política, que tiende a consolidarse en el imaginario popular.

Aparte del aspecto ético, los desafíos de nuestra era exhiben un carácter altamente complejo y de resultado incierto, que bien poco tienen que ver con las preocupaciones de los políticos y su horizonte temporal, que están determinados precisamente por factores democráticos y de breve plazo tales como las elecciones y las exigencias de los votantes. Las masas de los ciudadanos piensan en dimensiones de corto aliento y en soluciones sencillas, fácilmente comprensibles. Ejemplos de los complejos retos contemporáneos son el impacto de la acción humana sobre la naturaleza y el clima y la brecha entre el «tiempo político» y el «tiempo de los problemas». La programática simplificadora de los partidos y las propuestas demagógicas y falaces de los políticos se amolda, empero, a las demandas simplistas e inmediatistas de los votantes. Pero aun dejando de lado estas prácticas detestables, las elites gubernamentales no tienen opciones para los grandes desafíos del futuro. Como afirmó Yehezkel Dror:

Las elites estatales no tienen idea de qué hacer. ... Mi propia experiencia al asesorar a quienes toman decisiones de alto nivel ... refuerza una conclusión grave: inclusive cuando los principales políticos y sus asesores tienen el poder adecuado e incluso si tuvieran todavía más, muchas veces no sabrían qué hacer para enfrentar los problemas del siglo XXI.¹¹

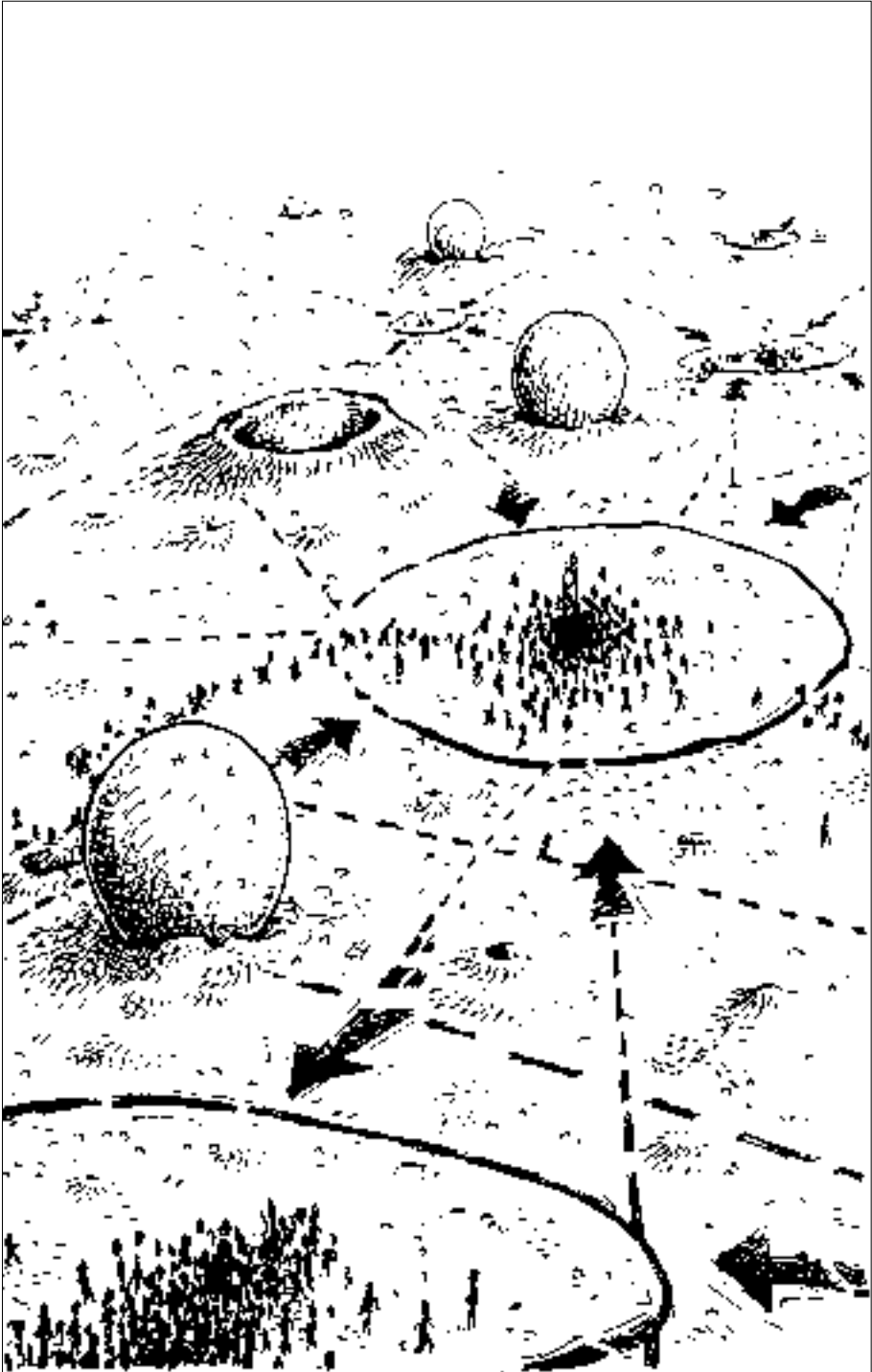
En el Tercer Mundo, los dirigentes y partidos democráticos han imitado con cierto éxito el liberalismo económico del Norte, pero han despreciado con igual energía las virtudes cívicas que hicieron grandes a aquellos países. Han desestimado el espíritu crítico y científico de Occidente, pero han importado sin restricciones la estulticia difundida por los medios masivos de comunicación, la comercialización de la vida cotidiana y los métodos más refinados de corrupción financiero-bancaria. Estas elites contemporáneas son agrupaciones de los mediocres, taimados y astutos, coaligados metódicamente contra los de espíritu crítico y vocación ética. En este contexto emerge una cuestión más profunda, estrechamente vinculada, sin embargo, a la anterior. Varios de los actores sociales clásicos, como los partidos políticos, denotan en toda

11. Yehezkel Dror: «Propuestas para el nuevo milenio» (parte I) en *Perfiles Liberales* vol. 11 N° 53, 5-6/1997, México, p. 71.

América Latina un desgaste y un descrédito notables –que se los han ganado a pulso, sin duda alguna por sus actitudes en el goce del poder–, perdiendo su facultad de convocatoria pública y su función de representación de intereses sectoriales. Las consecuencias son conocidas: la apatía político-electoral de la población, la inclinación por soluciones populistas y neototalitarias, la exclusión de dilatados sectores sociales de la vida político-cultural y la pérdida de legitimidad de muchas reformas modernizantes. Los políticos profesionales son personas con un nivel cultural bastante limitado y con un horizonte de anhelos muy restringido: *potestas, pecunia y praestigium*¹². Precisamente en el marco de la democracia de masas los políticos intentan parecerse a los presentadores de televisión y a los expertos en relaciones públicas, excluyendo todo indicio de intelectualidad, espíritu crítico y responsabilidad social. Sus escasos conocimientos son poco fundados, circunstanciales, fácilmente reemplazables; su máxima habilidad consiste en vender en el momento adecuado –y a buen precio– esas modestas destrezas a un público ingenuo que tampoco exige gran cosa de ellos.

Dilatados sectores de las elites contemporáneas han aprendido a celebrar elecciones correctas y apropiarse simultáneamente de fondos públicos mediante mecanismos más refinados que en tiempos de dictadura; en innumerables casos los mismos políticos, que por un lado propician reformas institucionales de indudable calidad, se consagran, por otro, a aligerar el erario fiscal por medio de instrumentos innovadores y endiabladamente eficaces. Las privatizaciones favorecen a los grupos que cuentan con fuerte respaldo político. Contratos superfluos, pero legales, asesorías sobrevaluadas, trabajos prescindibles para el reducido Estado neoliberal –enflaquecido, pero aún jugoso para aquellos que lo saben manipular– y muchos otros instrumentos de enriquecimiento rápido son usados por los mismos funcionarios que implementan la indispensable modernización del aparato gubernamental. La misma clase política que propugna las reformas institucionales ha desplegado una envidiable destreza para que estas últimas no modifiquen esencialmente sus viejos privilegios. En América Latina la creación de nuevos órganos en el sistema de justicia, como la corte constitucional, el defensor del pueblo, el consejo de la magistratura y tribunales contencioso-administrativos o la introducción de nuevos códigos y estatutos legales, no han logrado desterrar o siquiera reducir los vicios clásicos de esta institución: la extrema lentitud de los juicios, la corrupción proverbial de jueces y funcionarios de los tribunales, el carácter innecesariamente enrevesado y tortuoso de los procedimientos y la subordinación al Poder Ejecutivo. En el Perú el autogolpe del presidente Fujimori en 1992 abarcó la disolución del Parlamento y de la Corte Suprema de Justicia, las dos medidas más aplaudidas y apoyadas por el grueso de la población. El «nuevo» aparato judicial está conformado, empero, casi totalmen-

12. Poder, dinero y prestigio conforman desde la Antigüedad clásica los valores normativos de los políticos que exhiben propensiones antiaristocráticas y dicen representar los intereses de grupos emergentes de los estratos medios y bajos; «prestigio» abarca también el significado de fascinación mágica, ilusión y hasta engaño –además del de autoridad o reputación–, atributo muy importante para los políticos de todas las épocas y latitudes.



© 2000 Astur Demarino/Nueva Sociedad

te por los antiguos jueces y funcionarios, cuyos niveles de corrupción y co-rruptibilidad han ascendido en los últimos años. El «nuevo» Parlamento de-nota los mismos defectos que el anterior, además de un marcado descenso en la calidad del debate¹³.

Por otra parte, nunca en América Latina se han gastado tantos fondos como en los últimos años en la modernización de las policías nacionales, y nunca la inseguridad ciudadana ha sido mayor. Jamás se había discutido tanto sobre temas de medio ambiente (incluidas las muchas cumbres presidenciales y la creación de innumerables instancias consagradas presuntamente a cuestiones ecológicas, como el Ministerio de Desarrollo Sostenible en Bolivia), y nunca se han aniquilado tantos bosques como en los últimos años. Nunca en el Nuevo Mundo se hicieron tantos esfuerzos modernizadores para ampliar y mejorar las autonomías municipales, y jamás se dio una ola similar de corrupción y apropiación privada de fondos fiscales en el ámbito de las alcaldías y regiones descentralizadas. Sería naturalmente necio el postular un nexo causal obligatorio entre los esfuerzos modernizantes y la multiplicación de los fenómenos de corrupción, pero sería igualmente ingenuo el negar toda relación entre ambas corrientes. Después de todo, la implementación de las reformas ha estado y está en manos de grupos sociopolíticos que disponen de la educación técnica y legal de rigor hoy en día, que exhiben las necesarias pautas cosmopolitas de comportamiento y que encarnan el espíritu tecnocrático de la época... pero que son los principales beneficiarios de la dilatada corrupción. Y es de lamentar que estos grupos en general posean irónicamente una legitimación democrática.

Las teorías institucionalistas pasan por alto algunos aspectos muy difundidos como la apatía, el cansancio y la indiferencia socio-política de la población, aspectos unidos a metas existenciales de carácter muy prosaico, centradas en la supervivencia y el consumismo. La carencia de virtudes cívicas, por un lado, y la enorme apatía de la población con respecto a temas programáticos, por otro, parecen representar actualmente las pautas de comportamiento cultural-político más expandidas en América Latina. Y esta constelación no parece ser favorable a la instauración de una democracia sólida y duradera. Pero hay otras causas más profundas para este fenómeno. Como se sabe por importantes investigaciones empíricas inspiradas por el psicoanálisis social, la apatía viene de la mano del comportamiento autoritario y de la debilidad del ego en la actual sociedad hiperdesarrollada, la cual no ha reducido, sino que ha modificado el patrón general de algunos prejuicios, dirigidos habitualmente contra el *otro*, los disidentes, los que se atreven a pensar de manera diferente. La agresividad se vuelca contra los débiles y las minorías, la sumisión hacia los fuertes se hace patente y surge el anhelo de gobiernos autoritarios y entes colectivos vigorosos. Precisamente las personas con un yo débil –como se da también a causa de las tendencias tecnicistas y antihumanistas de la

13. Romeo Grompone: «El reemplazo de las elites políticas en el Perú» en *Nueva Sociedad* N° 144, 7-8/1996, pp. 114-125.

educación contemporánea— cultivan un narcisismo y un infantilismo colectivos y creen que la realidad del momento dado es el horizonte insuperable e inescapable de todo pensamiento y proyecto. La cultura contemporánea de masas, con sus propensiones antiintelectuales, antiaristocráticas y antihistóricas, ha debilitado al espíritu crítico, que ha sido una especie de barrera contra los peligros del totalitarismo. El tipo predominante del autoritario actual combina cualidades que solo a primera vista parecen antagónicas: posee simultáneamente destrezas técnicas y prejuicios retrógrados, es celoso de su independencia y tiene miedo de no ser igual a los demás, se viste de manera extravagante y sigue devotamente las convenciones de su grupo, se cree progresista y es cínico, se considera individualista y se somete fácil y gustosamente a las modas y a la autoridad del momento.

Las falacias del crecimiento y el desarrollo incesantes

Los teóricos de la transición democrática presuponen, por lo general, la *positividad* sin mácula del libre mercado, del crecimiento económico incesante y de los difusos fenómenos de globalización vinculados a la evolución del capitalismo actual. Su talante básicamente apologético les impide percibir la desilusión de muy dilatados estratos sociales con respecto a este desenvolvimiento y los peligros inherentes a este proceso, que van desde el creciente predominio de mafias capitalistas totalmente inescrupulosas hasta el aniquilamiento de identidades colectivas conformadas a lo largo de siglos y que tenían la ventaja de brindar sentido existencial y seguridad emotiva a sus habitantes. Estamos llegando a un ordenamiento socioeconómico donde todo tiene precio, pero nada valor, mientras que, de acuerdo a la experiencia histórico-cultural, podemos afirmar que, en el fondo, las cosas realmente importantes para el Hombre están allende la ley de la oferta y la demanda, pues son aquellas que transmiten plenitud y dignidad a la vida individual. El terreno de la ética y la estética, el mundo de la ciencia genuina, la protección del medio ambiente, la vida familiar e íntima, el amor en casi todas sus manifestaciones, la concepción de justicia y la preocupación eminentemente política por el bien común constituyen fenómenos no cuantificables, a los cuales no se les puede aplicar ninguna «ley del mercado». Detrás de la admiración *acrítica* por el mercado y sus éxitos se encuentra una visión demasiado optimista sobre la modernidad, visión que celebra como avances civilizatorios la creciente diferenciación de roles y funciones, la individualización de los nexos humanos y la integración compulsiva en redes funcionales y abstractas, olvidando que este «progreso» conlleva la atomización de las personas, la negación de los nexos primarios y la terminación de la solidaridad espontánea. El resultado es el surgimiento de un uniformamiento sofocante que, paradójicamente, conduce al menoscabo de los propios procesos de diferenciación y que reprime el florecimiento de genuinos sujetos individuales y sociales.

La veneración que los partidarios de la transición democrática despliegan ahora por mercados desregulados puede conducir a que el Estado respectivo

abdique de sus facultades y responsabilidades en favor de otros actores y procesos que no poseen ninguna legitimidad democrática ni están sometidos a control racional alguno como las plutocracias mafiosas, las burocracias internacionales, los flujos financieros y comunicacionales, las potencialidades de la bioingeniería, las alteraciones ecológicas y el tráfico de drogas. Fuerzas económico-financieras, exentas de toda regulación y de todo control por parte de la sociedad civil, no han resultado ser las asignadoras ideales de recursos y fondos, y, por otra parte, son ciegas frente a las exigencias ineludibles de la justicia social, el medio ambiente, el Estado de derecho y las identidades colectivas. La economía es —o debería ser— uno de los cimientos de la vida humana, y no la meta final de nuestros mejores esfuerzos y anhelos. Aquí también se da una confusión entre medios y objetivos.

Uno de los componentes básicos de la legitimidad democrática contemporánea se asienta en la capacidad de la sociedad respectiva de brindar un nivel de vida decoroso a la masa de la población, nivel que está determinado en gran proporción por las exigencias siempre crecientes del público y éstas, a su vez, por lo ya alcanzado en las naciones altamente desarrolladas. Se trata, obviamente, de demandas elásticas (hacia arriba), que presuponen un aumento incesante de las actividades económicas de toda índole y, por consiguiente, sobrecargas cada vez mayores sobre los frágiles ecosistemas de todo el planeta. La concepción de un crecimiento económico ilimitado pertenece, como se sabe, a la dogmática del neoliberalismo, al núcleo de la doctrina del desarrollo sostenible, a la programación socialista y socialdemocrática y a las tendencias populistas y nacionalistas; es, simultáneamente, una de las ideas básicas que *a priori* subyacen a casi todas las teorías de la transición democrática. En vista del carácter finito de la Tierra y los recursos naturales y considerando el incremento de la contaminación ambiental y el estado precario de los ecosistemas, estas visiones del mundo están edificadas sobre simples ilusiones, que los políticos, los responsables de los medios masivos de comunicación y hasta los teóricos de la transición democrática y la modernización se esfuerzan en mantener y fomentar como tales. En realidad la idea de un crecimiento irrestricto es un mecanismo de autoengaño, que parte de presupuestos falsos, pero que tiene la función principalísima de tranquilizar las conciencias. De la misma forma, la competitividad a cualquier precio, la modernización a ultranza y el desarrollo como fin en sí mismo constituyen mitos contemporáneos basados en una lógica deleznable y en una total irresponsabilidad de cara al porvenir. En la praxis esto ha significado que la economía tradicional de muchas sociedades ha sido destruida, sin que una alternativa aceptable haya ocupado su lugar, que el futuro del país respectivo fue hipotecado a instituciones supranacionales y que el medio ambiente ha sido destruido de modo que nunca más podrá regenerarse.

La competitividad excesiva, el anhelo de triunfar en el mercado mundial y la manía de percibir todas las relaciones humanas mediante la lupa financiero-económica se basan en factores y suposiciones irreales, irracionales, antieconómicas y de corto plazo. Las grandes naciones han triunfado porque

1) han producido en primer término para su mercado interno, 2) se han preocupado más o menos exitosamente por evitar grandes desigualdades y por generar un mínimo de justicia social, y 3) han consagrado fondos y esfuerzos a la investigación científica, a la educación general y al ornato público. El principio de la competitividad llevado al extremo es, como señaló Fernando Mires, inviable, autodestructivo e inmoral; la concepción de la fijación libre de precios por el mercado globalizado y solo mediante factores intraeconómicos es un mito, porque los precios son determinados en gran parte por factores culturales, ecológicos y políticos¹⁴.

Los demócratas transformados en neoliberales comparten con antiliberales y socialistas algunas normativas básicas de la evolución histórica: el desarrollo y el crecimiento incesantes han sido convertidos en valores mágicos y casi sagrados, el desprecio por precauciones conservacionistas y ecologistas se mantiene pese a una cierta retórica de moda bajo el lema del «desarrollo sostenible», y la edificación de un gran aparato productivo sigue representando la gran prioridad de política pública y privada. Ambas corrientes (estatizantes y neoliberales) denotan, en el fondo, fuertes inclinaciones industrializantes, si bien la antigua consigna de «sustituir las importaciones» haya sido cambiada por la de «diversificar las exportaciones».

La apertura total, la inmersión indiscriminada en la así llamada globalización y la competitividad a ultranza conforman rasgos de una psicosis colectiva, que terminará por erosionar todo contrato social, por convertir toda racionalidad en una meramente instrumental y por ceder la formulación de los grandes objetivos políticos en favor de consorcios privados, a los cuales el bien común les es absolutamente indiferente, como aseveró Riccardo Petrella, entonces miembro de la Comisión Europea, instancia central de la Unión Europea en Bruselas: «The economy seems to have increasingly lost any sense of purpose»¹⁵. Un ministro sueco de Cooperación para el Desarrollo Internacional, Pierre Schori, comentó, basado en estudios de las Naciones Unidas, que la tan celebrada globalización habría conllevado una desestabilización del orden social para la mayoría de los Estados, la erosión de la cohesión social, un marcado empobrecimiento del universo cultural y comunicativo y ganancias solo para un pequeño grupo de empresas y naciones¹⁶.

La necesidad de un enfoque basado en la noción de bien común

Contra el optimismo de los institucionalistas, puede aseverarse que los estatutos y las prácticas democráticas no garantizan que las políticas públicas resultantes sean razonables o siquiera practicables; todo régimen concreto

14. Fernando Mires: *La revolución que nadie soñó o la otra modernidad*, Nueva Sociedad, Caracas, 1996, p. 20 y ss., p. 108 y ss.

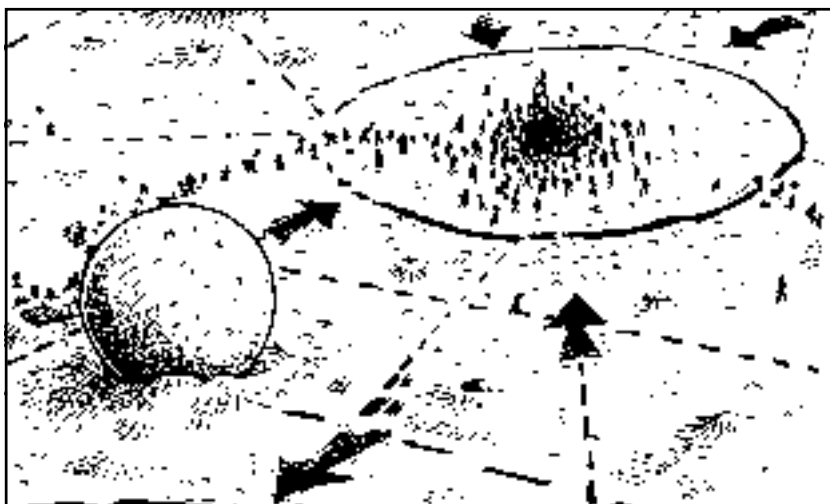
15. Riccardo Petrella: «The Quest for Competitiveness and the Need for Economic Disarmament» en *Internationale Politik und Gesellschaft* N° 1, 1996, Bonn, p. 7.

16. Pierre Schori: «Después de la Guerra Fría: ¿un nuevo conflicto Norte-Sur?» en *Nueva Sociedad* N° 142, 3-4/1996, p. 159.

depende no solo de instituciones bien construidas, sino de elementos aleatorios, de visiones particularistas y de intereses predeterminados por las condiciones del tiempo y el lugar. El énfasis en las reglas de juego puede y suele ir de la mano de la indiferencia ante las grandes metas normativas de la sociedad y ante el contenido de las políticas públicas. Por todo ello la reducción de la *legitimidad* a la mera *legalidad* y el rechazo de los valores trascendentes de orientación constituyen los aspectos más cuestionables de las teorías contemporáneas sobre la democracia.

Los enfoques institucionalistas se basan en un liberalismo contractualista (como el postulado por Hobbes) que remite a los comienzos de la tradición burguesa. La legitimación del poder y el Estado estaba dispensada de toda reflexión ética; el Hombre era considerado como un mero portador de intereses egoístas e inclinaciones individualistas; lo negativo por excelencia residía en el desmoronamiento del orden público; y la solución consistía en la elaboración de un marco contractual-institucional que pudiese resistir la guerra perenne que es la competencia por bienes materiales y seguridad. En el marco de esta concepción teórica el orden sociopolítico deja de tener conexiones vitales con el derecho natural y se transforma en una construcción precaria: ya no se busca el bien común, sino evitar males mayores. En medio de una modernidad con propensiones anómicas y autodestructivas debemos, empero, retornar al concepto aristotélico del bien común definido éticamente. La vida política es algo más que la canalización del miedo mediante conflictos regulados; la cohesión social es algo más que una ficción institucional que reduce los riesgos de la anomia. El Hombre es algo más que el animal exento de vínculos morales y emotivos, sediento de poder e insaciable de éste, como lo vieron Hobbes y sus discípulos: no todos perciben en el prójimo un medio para la satisfacción de sus intereses y fines. En general muchas concepciones contractualistas se restringen a un tipo de racionalidad: la instrumental. Esta emerge como la consejera privilegiada de un egoísta inteligente que actúa dentro de un programa de meros intereses materiales, calculables y profanos, y se conforma con el orden establecido y coopera con sus autoridades porque esta estrategia le trae más ganancias que la confrontación permanente.

En el presente requerimos, en cambio, de una razón objetiva que vaya allende el análisis de los medios y cuestione también los fines de la organización social. Precisamos una razón que trascienda el cálculo de estrategias y que se preocupe por objetivos no cuantificables como la convivencia razonable con los otros, la conservación de los ecosistemas a largo plazo, la moralidad social y la estética pública. La vida bien lograda no significa una vida de consumismo material excesivo, sino una de cooperación adecuada con los otros. La consecuencia positiva de este enfoque es una idea del bien común, no libre de elementos práctico-pragmáticos, que se asienta en el respeto y la comprensión de los derechos de terceros: de este respeto a algo que uno exige para sí mismo de modo egoísta y de su expansión y aplicación a muchos casos, nace una concepción del bien común que se abstrae de la moralidad específica de cada sujeto. Aquellos que persiguen su propia ventaja de manera egoísta,



pero de modo razonable, es decir a largo plazo, terminan —a veces— por reconocer los derechos de terceros. La mera tolerancia del otro en cuanto estrategia conveniente en un contexto pacífico se transforma paulatinamente en una actitud empática que trata de colocarse en el lugar del otro y de aceptar sus objetivos como normales y legítimos.

El individuo en sociedad requiere necesariamente de una moral que modere y canalice sus exigencias siempre crecientes: las instituciones restringen ciertamente sus instintos e intereses, pero enriquecen su vida cultural y social y, ante todo, preservan los derechos de terceros, que tienen la misma dignidad ontológica que los primeros. Aún tenemos necesidad de la noción clásica del bien común, para evitar la caída en la anomia y la destrucción: la democracia pluralista y el mercado libre deben funcionar en el marco de valores generalmente admitidos. Tenemos asimismo que recobrar la capacidad de decir «no» a las dilatadas estulticias sociales, aceptadas democráticamente y difundidas por los medios masivos de comunicación. «Hay que reanudar la crítica de nuestras sociedades satisfechas y adormecidas», escribió Octavio Paz, y «despertar las conciencias anestesiadas por la publicidad»¹⁷.

Por último, debemos pensar en revalorizar concepciones que no tienen precisamente que ver con democracia ni con modernización: el retorno a la tradición entendida como herencia crítica, la religiosidad en cuanto dotación de sentido y la revalorización de las aristocracias culturales e intelectuales como factores para diluir la alienante cultura moderna de masas y para refrenar las plutocracias mafiosas.

17. Octavio Paz: «La democracia: lo absoluto y lo relativo» en *Vuelta* N° 184, 3/1992, México, p. 14.